



Trump impuso sus prioridades

(Mathieu Tourliere, pág. 35-37)

Al cumplir con los términos de la “negociación forzada” que le impuso Washington para impedir el paso de los migrantes centroamericanos en México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en un “instrumento” en el proyecto de la “ultraderecha blanca y supremacista” que encabeza el presidente estadounidense Donald Trump, deplora **Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM)**. En entrevista con Proceso, el académico sostiene que “en lo que va del siglo, es la primera vez que el aparato de contención migratoria adquiere estos niveles (...) No lo habíamos tenido ni con Felipe Calderón, quien endureció mucho la frontera sur, tampoco con Enrique Peña Nieto ni con Vicente Fox”. El próximo 5 de septiembre se cumplirá el segundo plazo de 45 días que Trump dio a México para reducir “significativamente” la llegada de migrantes a su frontera, según el acuerdo que el canciller Marcelo Ebrard Casaubon firmó en nombre del gobierno mexicano el pasado 7 de junio en Washington.

El exfuncionario y ahora investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo en la UNAM, renunció al INM el pasado 14 de junio, tres días después que AMLO oficializó, en su conferencia matutina, el paso de las riendas de la política migratoria a Ebrard. “En los inicios de la inclusión de la Guardia Nacional –relata–, no estaba yo en condiciones de operar en ese esquema (...) Con este giro de prioridades hubo una necesidad urgente de un nuevo liderazgo en el INM, y así lo reconocí. Cuando la política migratoria empieza a ser conducida por la cancillería, hay un cambio, hay nuevos actores, hay nueva visión”. Y abunda: “La cancillería estaba muy preocupada por el asunto de los aranceles, progresivamente se fue posicionando por instrucciones del presidente en un rol más directivo; no directo, pero sí definiendo prioridades, un horizonte, que era el fortalecimiento de la capacidad de regulación en la frontera sur. Al final yo ya no participaba directamente”. A raíz del acuerdo con Washington, el gobierno federal –bajo la supervisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores– echó a andar toda la maquinaria del Estado para reducir el flujo migratorio: entre junio y julio agentes del INM, PF y GN detuvieron a 47 mil 911 migrantes y deportaron a 40 mil 70, el mayor número registrado en un bimestre desde que el INM publica sus estadísticas.

Proyecto supremacista

“El proyecto de Trump retrata su visión racista de Estados Unidos, una visión de la ultraderecha blanca supremacista”, considera Guillén, y añade: “Está clara su visión de generar no solamente una medida, sino un conjunto amplio de instrumentos que conduzcan al resultado que quiere: migración cero. Esa es su idea”. Enumera algunas de estas medidas que Washington aplica desde el año pasado: en junio de 2018 puso en marcha su política de “tolerancia cero” marcada por la separación de las familias migrantes; canceló los Esta-tutos de Protección Internacional (TPS) que protegían de la deportación a miles de migrantes hondureños, haitianos y salvadoreños, y en



diciembre puso en marcha el plan “Quédate en México”, con la aceptación del gobierno de López Obrador. A lo largo de 2019 la administración Trump anunció que prohibiría el acceso al refugio para las personas que llegaron a la frontera sur y no pidieron asilo en México; amenazó con recortar las ayudas económicas a los países del Triángulo Norte de Centroamérica; lanzó una iniciativa para eliminar el programa DACA, que protege a millones de hijos de indocumentados; anunció que impedirá el acceso a la residencia legal –la green card– para las personas que reciban subsidios o programas sociales, y planteó su intención de eliminar el límite de 20 días de detención para los niños migrantes, con lo que las autoridades podrían encarcelar a los menores durante un periodo indefinido.

“Espero que sea temporal”

Al frente del INM Guillén impulsó la llamada “nueva política migratoria”, que promovía la defensa de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, el cese de los operativos policiacos contra las personas en tránsito, un mayor acceso a documentos y la mejora de las condiciones socioeconómicas en las regiones de origen. También planteaba una “purga” en el INM para retirar a sus elementos corruptos –en el momento de su renuncia, la institución había despedido a 500 agentes– y sustituirlos por elementos que contaran con licenciatura, a los que se les duplicaría el salario. Eso con el afán de limpiar al instituto que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, describió como una de las dependencias “más corruptas”. Al menos en el discurso, dicha política marcaba una ruptura radical con las medidas de contención implantadas en sexenios anteriores, particularmente en el marco del llamado Programa Frontera Sur, que lanzó la administración de Peña Nieto en 2014, el cual desembocó en la deportación de más de 700 mil personas a Centroamérica y provocó la indignación de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Guillén subraya que la “nueva política migratoria” se presentaba como un proyecto central de la Cuarta Transformación lopezobradorista, que en sus palabras consiste en “reformas no menores, que alcancen repercusiones históricas” y en “una ruptura con sexenios anteriores”.

ooo0ooo

Fondo, forma y modos de López Obrador

(Arturo Rodríguez García, pág. 8-12)

Desde que asumió la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador consolidó su discurso que traía desde su época de opositor, sólo que ahora de cara al pasado y suele dirigirlo hacia quienes se oponen a sus decisiones gubernamentales, colocándoles la etiqueta de neoliberales, conservadores o, sencillamente, adversarios. Y lo invoca tanto en momentos críticos como en los anuncios de los programas insignia de su administración. “Ahora resulta que quienes aumentaron el precio de la gasolina están pidiendo que baje”, reviró en su discurso inaugural el 1 de diciembre a la



bancada panista que mostró cartulinas pidiendo bajara el IVA y la gasolina. A partir de ese día sus referencias al “periodo neoliberal” o al “neoliberalismo” –como llama a los gobiernos que lo ante-cedieron– han sido constantes, lo mismo que las dirigidas a sus

“adversarios”, los “conservadores”.

Los mensajes simbólicos

El 22 de enero, cuatro días después de la explosión de Tlahuelilpan, el presidente se trasladó a Acambay, Estado de México, para lanzar los programas de Bienestar, como prioridad para los municipios por donde atravesaban ductos. Aunque 91 municipios de una decena de estados tenían ductos, el mandata-rio eligió Acambay, lugar de la ascendencia familiar de su antecesor Enrique Peña Nieto, quien tuvo como jefe de seguridad al general León Trawitz cuando fue gobernador y lo habilitó como seguridad en Pemex cuando estaba en Los Pinos. El militar está implicado por complicidad en las pesquisas del llamado huachicol. Los mensajes simbólicos y los relacionados con la historia son frecuentes en la actuación presidencial: desde el 1 de diciembre abrió al público la exresidencia oficial de Los Pinos, la sede del presidencialismo mexicano desde Lázaro Cárdenas hasta Peña Nieto. Extinguió el Estado Mayor Presidencial, asociado al guarurismo, así como al Centro de Información y Seguridad Nacional, relacionado con el espionaje político y los procesos represivos.

Condenas y negociaciones

La elección de gobernador de Puebla se decidió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), otorgándole al triunfo a la panista Martha Érika Alonso y motivando la reacción del presidente López Obrador el 10 de diciembre: “Lo dije con toda claridad, porque ya también basta de formalismo hipócrita. Des-de luego que, como ciudadanos, pueden de usted es el titular del Ejecutivo. Sí, pero también soy ciudadano. Creo que fue una decisión equivocada, antidemocrática, lo tengo que decir porque vengo de un movimiento en donde siempre enfrentamos fraudes electorales y nunca dejamos de condenar es-tas prácticas antidemocráticas.” A continuación, mencionó que órganos como el TEPJF y el Instituto Nacional Electoral (INE) eran integrados mediante componendas entre los partidos y el gobierno. También dijo que respetaba la independencia del Poder Judicial. Al mes, Janine Otálora renunció a la presidencia del tribunal. En otras ocasiones ha descalificado al INE, pero no es el único órgano constitucionalmente autónomo destinatario del mensaje presidencial.

En boca cerrada

Los miembros del gabinete han enfrenta-do también los dichos del presidente López Obrador, particularmente en las conferencias “mañaneras”, al ser desmentidos en alguna postura. La segunda semana de marzo, por ejemplo, el entonces subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, concedió una entrevista al diario británico The Financial Times en la que dijo que no se construiría la refinería de Dos Bocas, megaproyecto energético del sexenio. El 13 de marzo, el mandatario lo desmintió y lo hizo de nuevo



el 8 de abril, cuando el funcionario expuso ante diputados que podría revivirse el impuesto por tenencia vehicular y el presidente atajó, al día siguiente y con Herrera presente, que no crearía nuevos impuestos.

También en abril, el día 9, Javier Jimenez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que no había encontrado hechos de corrupción en el cancelado proyecto aeroportuario de Texcoco. Al día siguiente, el presidente dijo que sí hubo y se canceló por eso. A Olga Sánchez Cordero, la titular de Gobernación, la desmintió sobre estar en pláticas con grupos armados, apenas a mediados de agosto.

Frente a las alianzas y oposiciones

Con alianzas renovadas en lo que antes llamó “la mafia del poder”, López Obrador llega a su primer informe con su consejo asesor empresarial, integrado por los magnates de las televisoras, el apoyo del presidente del Consejo Mexicano de Negocios y del Consejo Coordinador Empresarial. También con la oposición activa de Claudio X González, impulsor de amparos contra sus proyectos emblemáticos como el aeroportuario de Santa Lucía, así como de la Confederación Patronal de la República Mexicana, cuyo presidente, Gustavo de Hoyos, ha fijado posturas críticas a la administración, inclusive imputándole al mandatario afanes reeleccionistas.

ooo0ooo

Retropopulismo y extravagancia

(Roger Bartra, pág. 16-17)

Andrés Manuel López Obrador me ha parecido, desde que emergió en la escena mexicana, como un ejemplo de líder populista sacado de un manual de ciencia política. Su nacionalismo autoritario y su infatuación como representante de todo el pueblo no dejan lugar a dudas sobre su talante populista. Pero cabe preguntarse: ¿qué clase de populista es hoy el presidente López Obrador? ¿Qué estilo personal le imprime a su gobierno? ¿Qué lo distingue de los ejemplos de dirigentes populistas latinoamericanos clásicos como Perón o de versiones posteriores encarnadas en personajes como Hugo Chávez? ¿Qué lo hace diferente del gran fundador del populismo mexicano, Lázaro Cárdenas?

A varias medidas francamente reaccionarias de su programa, una vez que llegó a la Presidencia agregó sorprendentemente las decisiones de legalizar las funciones policiacas del Ejército, **creando la Guardia Nacional, y de perseguir a los migrantes centroamericanos**, al aceptar vergonzosamente las órdenes del otro populista reaccionario que gobierna al otro lado de la frontera. Todo ello acompañado de la resurrección de una política populista de subsidios y subvenciones como hacía el viejo PRI. En resumen: retropopulismo.

ooo0ooo



AMLO le fallaron los cálculos

(Jesusa Cervantes, pág. 22-24)

Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no le salieron las cuentas. Nunca tuvo un ahorro en las finanzas, o como ellos le llaman, un subejercicio; lo que sucedió es que dejaron de ingresar 121 mil millones de pesos debido a que recaudó menos impuestos, cayó el precio del petróleo e incluso el ingreso petrolero fue mucho menor

al estimado. Todo ello llevó a que hiciera un recorte anticipado de sus programas sociales, por ejemplo el estelar, Jóvenes Construyendo el Futuro, cuyas becas se limitaron a 900 mil beneficiarios para este año en lugar del millón anunciado. Tan sólo en este programa se dejó de gastar 10 mil millones de pesos. ¿La razón? Falta de dinero. Lo anterior se desprende de documentación oficial, como el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda al segundo trimestre de 2019 y los Precriterios para 2020.

Menos inversión, menos recaudación

El paquete económico para el primer año de gobierno de la 4T fue “inercial”, esto es, se armó con ingresos y egresos numéricos similares al del último año de Enrique Peña Nieto, como sucede en todos los cambios de administración federal. Sin embargo, la esencia del gobierno de la 4T fue la distribución del gasto, es decir, en quién se gastó. El economista Mario Di Costanzo explica en forma sencilla cómo se expresa el gasto: “Administrativamente, quién lo gasta; de la manera económica, en qué se gasta; y la funcional, en qué función gubernamental se está gastando”. Las funciones son “la administrativa, de seguridad, de desarrollo social y las productivas”, agrega Di Costanzo, quien durante el gobierno legítimo de López Obrador ocupara la cartera de secretario de Hacienda.

El dinero nunca llegó

El gobierno de AMLO se planteó tener ingresos para 2019 por 5 billones 298 mil 188.3 millones de pesos, un gasto de 5 billones 802 mil 29.6 millones de pesos y un déficit de 2%. Sin embargo, los ingresos no llegaron al monto previsto por la caída de los precios del petróleo, porque hubo menos producción y exportación del mismo, además de un descenso en la recaudación de ingresos tributarios (impuestos) y el entorno internacional. “Entonces, no puedes gastar al nivel que habías propuesto gastar porque si lo haces se te va el déficit y ya no cumples con mantenerlo en 2%”, comenta Di Costanzo. En el caso de los impuestos, en los primeros seis meses se obtuvieron 16 mil 440.4 millones de pesos menos por IVA y mil 182.7 menos por Impuesto Sobre la Renta.



Solución: eliminar consolidación fiscal

Para poder hacer frente a todos sus compromisos, el gobierno tuvo que tomar 121 mil millones de pesos del FEIP, que se formó a través de los años con los excedentes petroleros y el cual puede utilizarse legal-mente para equilibrar el gasto. Sin embargo, para el próximo año no podrá recurrirse a dicho fondo porque ya se quedó con sólo 80 mil millones. La falta de ingresos ha provocado que el gobierno reajuste constantemente su gasto. Por ejemplo, en el segundo informe trimestral consta que el gasto planeado, de 5 mil 298.2 millones de pesos, disminuyó a 5 mil 250.8 millones. Ahora, en sus precriterios de política económica para 2020, al cierre de 2019 se prevé una disminución de los ingresos para quedar en 5 mil 177.1 millones de pesos. La

diferencia se va a solventar con 121 mil millones tomados del FEIP. Pero el panorama para el próximo año aún es peor.

ooo0ooo

Despidos a rajatabla y sin diagnósticos

(Neldy San Martín, pág. 27-29)

Laura Lara fue despedida como inspectora federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en plenas vacaciones de diciembre de 2018. Con un mensaje de WhatsApp fue notificada de que debía presentarse a firmar su baja. Paradójicamente, su trabajo era velar los derechos de los trabajadores. Su sueldo no llegaba a los 10 mil pesos. Ella es una más de cientos de trabajadores del Estado, como decenas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Sector Salud, el programa Prospera y Notimex, que de diciembre a julio protestaron afuera del Palacio Nacional en contra de los recortes gubernamentales. En los primeros nueve meses de su administración, Andrés Manuel López Obrador hizo de la austeridad su sello de gobierno.

El temido memorándum

El pasado 19 de agosto López Obrador negó que su política de austeridad sea la responsable de miles de despidos. Durante su conferencia matutina de ese día fue cuestionado por los recortes en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex). El presidente culpó “a los con-servadores” de distorsionar la realidad: “Resulta que los conservadores, nuestros opositores, han convertido la austeridad en limitaciones de lo fundamental, es decir ‘hay austeridad y por eso no hay medicinas, hay austeridad y por eso no se están renovando los equipos médicos en hospitales, hay austeridad y por eso se está despidiendo a trabajadores’. Falso, falso.” Prosiguió: “Claro que hay inconformidad. Los que vivían sin trabajar, los que ganaban hasta 700 mil pesos mensuales, pues están inconformes, pero se tienen que ir dando cuenta de que ya no puede ser lo mismo”. López Obrador dijo que la austeridad es que los funcionarios aprendan a vivir en la justa medianía, como decía Benito Juárez, y que “no tiene nada



que ver con des-pedir trabajadores”. A decir del presidente, había muchos “burócratas” que se mantenían en el gobierno “para simular que se apoyaba la ciencia, la tecnología, lo que está de moda, la innovación tecnológica”

Programas recortados

Desde su campaña presidencial, López Obrador anunció que había demasiados programas sociales, por lo que algunos se fusionarían y otros desaparecerían. En el gobierno de Enrique Peña Nieto había 150 de esos programas y cuando terminó su sexenio el número de pobres era de 52.4 millones, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). “Partimos de la concepción de que la política social asistencialista basada en la focalización y asignación de subsidios condicionados está agotada, ya que, a pesar de que ha contenido el crecimiento de la pobreza extrema, el número de personas en condiciones de vida precarias es casi

idéntico al que había hace 25 años”, respondió López Obrador al Coneval durante la campaña, el 11 de junio de 2018.

ooo0ooo

Mucha Guardia Nacional, pero la violencia sigue

(José Raúl Linares, pág. 32-34)

Aun con el despliegue de la Guardia Nacional (GN) en to-do el país, la ola de violencia no cede. Un análisis estadístico elaborado por varios corresponsales de este semanario revela que en las entidades donde tomó el control el nuevo cuerpo de seguridad los delitos no han disminuido; algunas incluso registraron un ligero aumento en homicidios dolosos y extorsiones. Con respecto a los secuestros, las cifras experimentaron una ligera tendencia a la baja con la entrada en operación de la GN, aunque su relación con los delitos de alto impacto resulta poco significativa. “No olviden que del trabajo de ustedes va a depender mucho el que llevemos a cabo entre todos los mexicanos la Cuarta Transformación”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los 10 mil elementos congregados en el Campo Marte de la Ciudad de México el pasado 30 de junio. Las conclusiones estadísticas se obtuvieron del cruce de información de dos fuentes: Situación de la Guardia Nacional, un informe elaborado por el nuevo cuerpo de seguridad y fechado el 13 de agosto, así como de las cifras de delitos a nivel municipal que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) publicadas el 21 de agosto.

Homicidios, secuestros, robos...

Cuatro meses después de que la GN se estrenó en Veracruz como “fórmula experimental”, la violencia en el Golfo de México no sólo no disminuyó, sino que en algunos meses los homicidios dolosos y los feminicidios se incrementaron. La semana



antepasada una pareja fue ejecutada por hombres armados en las afueras del campus de la Universidad Veracruzana en Minatitlán, la misma región sur donde la GN entró en funciones para “regresar la paz” y “la tranquilidad” al pueblo, según palabras del presidente López Obrador. En la misma región, un día después de que entró la GN, tres hombres fueron ejecutados: dos en Acayucan cuando viajaban en un taxi y otro en el malecón costero de Coatzacoalcos.

“La vida no vale nada...”

La GN arribó a Guanajuato en medio del abierto desafío que el CJNG lanzó desde ahí a los tres niveles de gobierno mediante videos difundidos en las redes sociales y plataformas digitales. El grupo delictivo comandado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, manifestó su intención de erradicar de la región al Cártel de Santa Rosa. El recibimiento a la corporación federal ha sido cruento. Incluso es Guanajuato donde cayó el teniente Carlos Anastacio Juan durante un enfrentamiento con sicarios en la comunidad de Lomas de Zempoala en Yuriria, el 10 de agosto. El militar fue la primera baja de un integrante de la GN en una refriega en la que murieron cinco civiles. Hasta principios de año, el trasiego de combustible de Pemex era el motivo principal de los

homicidios dolosos, aseguraban las autoridades. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez y el fiscal estatal Carlos Zamarripa aseguran que en 2018 los homicidios dolosos fueron 2 mil 609, 85% de los cuales estuvieron relacionados con el huachicol, mientras en 2015 fueron menos de 900.

ooo0ooo